----- RESOLUCIÓN NÚMERO.- 35 (TREINTA Y CINCO).-

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 3 tres de marzo de 2021 dos mil veintiuno.- -----

----- Vistos para resolver los autos del Toca 23/2021 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, en contra de la sentencia del 27 veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, dentro del expediente 1100/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado, promovido por ***** , en contra de ***** ***** .- -----

----- R E S U L T A N D O -----

----- PRIMERO.- Mediante escrito presentado el 27 veintisiete de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, compareció ***** , ante el Juez de Primera Instancia de lo Familiar en Turno del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, a promover Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado, en contra de ***** ***** ***** de quien reclama las prestaciones que enseguida se transcriben:-

(SIC) “1.- La Disolución del Vínculo Matrimonial que me une con la demandada, y que demando en base y con fundamento en las reformas últimas al Código Civil vigente en nuestro Estado, concerniente al Divorcio In-causado; matrimonio civil, que en su momento Celebré y me une con la Demandada, ante la fe del oficial número Uno (Oficialía 1a) del Registro Civil, e día 15 de Diciembre del Año 2004, bajo el Régimen de Sociedad Conyugal, según consta en el libro número 4, foja 32 y con el Numero de Acta 632, de la oficialía en mención, de Ciudad Victoria Tamaulipas; lo cual acredito con el **Anexo 1**, que consiste en el certificado No. ***** , que me Expidió la Oficial Primera del registro Civil, C. ***** , el día 24 de Agosto del 2018. Lo exhibo en original con copia para la contraria. Proceso de divorcio Incausado regido por los Artículos 248, 249, 250, 251, 259 párrafo único fracción VI, 260, 264, 265 y demás; de fecha 15 de Julio del 2015; los cuales a la letra claramente estipulan y detallan el procedimiento a seguir. 2.- En su debido momento procesal, **determine**; en la resolución correspondiente, que ha de emitir su señoría, con fundamento en los Artículos 126 Bis. 325 fracción II y 668, del Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro Estado; como cosa juzgada, lo expuesto y acordado en el Convenio Celebrado entre la demandada y el que suscribe, en fecha **28 de Mayo del presente año(2018)**, en el centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos en este Primer Distrito Judicial en el

Estado, toda vez que este fue debidamente Certificado conforme a Derecho, por el Jefe de la Unidad Regional de tal Distrito, **Lic. *******; por ende, en base a los lineamientos planteados por el precepto antes mencionado (126 Bis.), del ordenamiento procesal en mención, pues dicho convenio fue debidamente certificado por dicho jefe de la Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos en comento; sobre todo en lo concerniente en los conceptos y cláusulas que en los rubros de: **Patria Potestad y Custodia, Pensión Alimenticia, Reglas de Convivencia y demás** literalmente, han quedado determinados, por voluntad propia, expuesta por ambas partes, ante tal autoridad; mismas que han de quedar en calidad de Derechos y Obligaciones, en dicho convenio, con respecto a las partes que intervenimos en el mismo; para con nuestra menor hija ***** cuya minoría de edad de esta, que acredito con la debida Acta y/o partidas de su Nacimiento, que exhibo en Original, mismas que fuera expedida por la Primera (1a) Oficial del registro Civil en Ciudad Victoria de la Secretaria General del Gobierno del Estado, C. *****; y que se exhibe en original, con su respectiva copia para la contraria, como **Anexo 2**. Cabe hace mención, que tal infante, se le distingue e identifica en el mismo convenio en mención, con las signas JGNS.; lo acredito con el Original de tal Instrumento, el cual se Exhibe con su respectiva copia para la contraria, como **Anexo 3.**;

procedimiento el cual no es necesario, pues la demandada **tiene original de la misma**, misma de la cual , para el caso que su señoría considere el que sea necesario, con fundamento en los parámetros de los artículos 248 fracción II y 330 tercer párrafo del Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro Estado, solicito el que se me tenga por ofreciendo como prueba documental pública de mi intención, misma la cual deberá de requerirle su señoría a la demandada para que exhiba el mismo, conforme lo regulan dichos preceptos. 3.- **Declare** procedente su señoría y/o Ordene, la Cancelación, de la Calidad de Propietaria, a la Demandada; sobre el Bien Inmueble y/o finca No. ***** identificado como Lote 15 de la Manzana 3 de la Colonia Vamos Tamaulipas, con una superficie de 160 metros cuadrados; amparado por la escritura, cuyo número de entrada como Certificado de Registración lo fue el No. 24118/2015 en este municipio de Victoria Tamaulipas, con inscripción de compraventa de fecha 10 de Julio del año 2015. Todo como resultado de haberle demostrado plenamente a su señoría, Inmueble en el cual habitáramos y construyéramos como domicilio conyugal, lo cual es el consistente en el terreno urbano, el cual fuera adquirido por mi persona, antes de conocer y de haber contraído matrimonio con la demandada; precisamente en los supuestos contemplados en el artículo **173 fracciones I y III del código Civil vigente en nuestro Estado**; y haberla mencionado

*a dicha demandada en tal escrituración, solamente a ruego y petición, que **me vi en la necesidad de no aclarar ante tal Instituto de Urbanización (ITAVU)**. Cuando en los archivos de dicho instituto obran y consta la fecha y año desde el cual solicité dicho inmueble ante tal Dependencia; pues existen en los archivos de tal Instituto; tanto la solicitud que elabore, dirigido al mismo, en la cual le requería un precio o solar; así como las copias y/o constancias, de todos y cada uno de los pagos que le realicé a dicho instituto de urbanización, a cambio de la adquisición del mismo. 4.- Que se condena a la demandada a Pagar los Gastos y Costas, que origine o cause este juicio.”. (SIC).- -----*

----- Fundándose en los hechos contenidos en el propio escrito de demanda los que pretendió acreditar con las pruebas que al efecto ofreció y anexó al mismo.- -----

----- Mediante escrito del recibido el 27 veintisiete de febrero de 2019 dos mil diecinueve se tuvo a la demandada dando contestación y opuso las excepciones a que se contrae en su escrito de cuenta: -----

----- Establecida la litis, se continuó con la substanciación del juicio por sus demás trámites legales y el 27 veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte el juez del conocimiento dictó la sentencia definitiva correspondiente, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:- -----

circunstancias y desarrollo personal de la menor.

SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria requiérase mediante notificación personal al señor ***** ***** ***** , a efecto de que otorgue cumplimiento voluntario a ésta determinación, y haga el pago de la cantidad de **\$1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** de manera mensual, por concepto de pensión alimenticia decretada a favor de su menor hija **K.S.M.**, debiendo continuar depositando la cantidad correspondiente, en la cuenta 0470340666, de la Institución Bancaria Banorte, con el apercibimiento que de hacer caso omiso, se aplicaran en su contra las reglas de ejecución forzosa. **OCTAVO.-** No se hace especial condena de costas debido a los efectos declarativos de esta resolución y la ausencia de temeridad o malicia en la conducta de las partes, y por ello, cada contendiente cubrirá sus erogaciones, de acuerdo con lo previsto en el numeral **131** fracción I del Código Adjetivo Civil. **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-** Así lo resolvió y firmó el **LICENCIADO PEDRO CAUDILLO GUTIERREZ,...** (SIC).- -----

----- **SEGUNDO.-** Notificadas las partes del fallo anterior e inconformes ambas, interpusieron en su contra recurso de apelación, el que fue admitido en ambos efectos, por el juez de primera instancia quien ordenó la remisión de los autos al Supremo Tribunal de Justicia donde por acuerdo plenario del 19 diecinueve de enero de 2021

dos mil veintiuno se turnaron a esta Sala Colegiada para su conocimiento y resolución. Ordenándose dar vista a la Agente del Ministerio Público Adscrito, quien la desahogó en términos de su escrito agregado a fojas de la 51 a la 54 del Toca en que se actúa.- -----

----- C O N S I D E R A N D O -----

----- PRIMERO.- Esta Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, es competente para conocer y decidir el presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, fracciones I y I-B y 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 104 fracción I y 106 de la Constitución Política local, 20 fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación a los acuerdos del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 3 tres de junio de 2008 dos mil ocho y 31 treinta y uno de marzo del 2009 dos mil nueve, publicados en el Periódico Oficial de la Entidad del 5 cinco de junio del 2008 y 7 siete de abril del 2009 dos mil nueve.- -----

----- SEGUNDO.- El demandado incidentista ***** , expresó en concepto de agravios, los que a continuación se transcriben:- -----

(SIC) *“AGRAVIOS. Me Agravia dicha sentencia que con la presente se impugna pues: 1.- Pues se observa y deduce fácilmente, de un sencillo análisis a tal sentencia; el que esta es en gran parte de la misma; completamente ajena a los autos y constancias procesales, incongruente, sin contar el hecho de que, en lo que coherentemente se deduce corresponder a los autos, a la vez resulta el que, en esta se valoraron las pruebas únicamente en perjuicio de lo demandado; llegando a no tomar en cuenta, pasar por alto y hasta ignorar las pruebas fehacientes idóneas y pertinentes, que corroboran los hechos, Derecho y acción ejercitada. La conducta y proceder manifiesta en tal Sentencia es nefasta; atenta contra todos los principios esenciales del proceso; contraviene este; y sobre todo, no cumple dicha sentencia, con los requisitos contemplados en el artículo 112 fracciones III, 113, 114, 115 primer párrafo; del Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro Estado. 2.- La conducta del A-quo en tal sentencia impugnada, atenta contra el debido proceso, y me agravia sobre todo por el hecho de contravenir y de valorar todo los aspectos que ambas partes habíamos acordado, por mutuo acuerdo, mediante un medio alternativo de solución de conflictos, como lo es la Mediación, mismo al cual ambas partes acordamos sujetarnos; sobre todo cuando dicho convenio se encuentra certificados y ratificados ante el Director del Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial, y en este caso Jefe de la Unidad*

*Regional. Contraviniendo lo que claramente exponen los artículos 126 Bis.; 252 Bis y 648 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en nuestro Estado; y que en tales aspectos ya convenidos; dicha autoridad impugnada, debió de haber determinado y resuelto en dicha sentencia, en calidad de cosa juzgada, tal como ya lo había determinado la autoridad mediadora conducta del A-quo, por la cual es muy evidente, el que contravino tal legal proceder; y atentó contra tal debido proceso; por ende le expongo al respecto: Le reclamo como Omisión en dicha sentencia interlocutoria emitida por dicha A-quo; el haber pasado por alto e ignorado el Acta de Mediación fecha **28 de mayo del 2018**, levantada ante la institución encargada de desahogar Medios Alternativos de Solución de Conflictos, tal como lo es la denominada Mediación; Medio Alternativo el cual nos avocamos asistir, o más bien, se me requirió asistir, por petición de la misma demandada, y en el cual, por mutuo acuerdo se determinó aportar por mi parte, por concepto de pensión, a favor de mi menor hijo, una cantidad de dinero acorde a mis posibilidades; pero además se contemplaron Reglas de custodia y CONVIVENCIA; las cuales el A-quo pasó por alto; más bien denegó su contemplación y disposición a implantarlas, prueba de ello lo es el hecho y llegó a expresarme el que tal **convenio de mediación no tenía valor alguno**, que lo que valía era de aquí para adelante, que él era la autoridad y él mandaba y disponía lo*

procedente. Así como demás conducta y proceder, que no viene al caso expresar, pues me resulta atentatorio en contra de mí misma personalidad; pero que sí, a veces resulta necesario hacerlo; pues tales conductas exteriorizadas y expuestas, por una autoridad, resultan rotundamente ilegales y muy poco profesionales. 3.- Por el hecho de valorar el A-quo, las pruebas únicamente en beneficio de la demandada, y siempre en mi perjuicio; así como no contemplar ni tomar en cuenta, así como ni siquiera mencionarlas en tal sentencia, las que acreditaban mi acción ejercitada en dicha demanda; contraviniendo lo que estipulan al respecto, los artículos 273, 275, 392, 409, 412 y demás del código de Procedimientos civiles vigente en nuestro Estado. 4.- Me agravia tal conducta desigual e inequitativa, que externa hacia mi persona dicho A-quo, más cuando a sabiendas de las causas que me orillaron a solicitar el divorcio, como lo fue la ausencia y des obligación de la demandada para con mi persona y mi hija; de que ella trabajaba y que también tenía ingresos, aunque acostumbrada en gastarlos solamente en ella, sobre todo en recargas y llamadas telefónicas, por lo tanto deber de aportar lo equitativa y proporcionalmente necesario; y a pesar de que me llegara a expresar el mismo A-quo, en tal diligencia Incidental previa de Reglas de convivencia; no se aprecia en tal resolución impugnada, el que dicho a-quo se haya preocupado por procurar, velar y salvaguardar los intereses máximo por proteger, respecto a mi menor

*hija, sobre todo entre estos, y el derecho que le asiste a dicha menor para convivir conmigo; y/o a mí, en mi calidad de padre, con ella; pues para nada pretendió determinar, ni fijó REGLA DE CONVIVENCIA ALGUNA; aun cuando la menor, al ser escuchada, expresó el que **sí deseaba convivir conmigo**; únicamente le incomodaba el que, cuando la llegaba a ver, le preguntara respecto a su madre; situación y acontecer el cual no es suficiente, ni contundente para ser Omiso respecto a determinar las debidas reglas de convivencia; como tampoco el ser motivo y razón alguna suficiente; la negativa constante y permanente de la madre de mi hija, a privarme, sin derecho alguno, a ver a mi hija, y prohibirle y condicionarle a sus padres (abuelos de la menor) para que me prohíban hacerlo o permitirlo; pues es con ellos, con quien deja encargada a dicha menor tal cónyuge; sin motivo y argumento legal alguno; más dicho A-quo, en tal diligencia desahogada con el fin de determinar precisamente tales Medidas Precautorias Pertinentes, determinadas en el artículo 259 del código civil vigente en nuestro estado; violentando con ello los Derechos Humanos de mi adolescente hija y de mí persona en calidad de padre; y contraviniendo los Principios de convencionalidad respecto a los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes, consagrados en los artículos 1°, 4° y 5 constitucionales; así como en los tratados internacionales, de los cuales México es parte, y está obligado a cumplirlos. Mas dicho tal A-quo, en*

tal diligencia, Y AHORA EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE SE LE IMPUGNA, en cuanto a tales reglas de convivencia con deber a determinar; FUE OMISO AL RESPECTO. 5.- La Omisión manifiesta en tal resolución interlocutoria impugnada, por parte del dicho A-quo; así como la NORMA GENERAL que le reclamo, como lo es la de inaplicar y/o contravenir por parte de tal a-quo, el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro Estado, como lo es la de estipular una pensión, para el caso de que así haya sido, acontecer el cual es notoriamente ajeno a las constancias procesales, pero a la vez haciendo mención de montos, exhortantes y ajeno a las posibilidades de mi persona, quien por cierto no es a quien tal resolución le determina tal carga de la obligación, pero s ele manifiesta tal agravio, para el caso de tal obscuridad e incoherencia de sentencia impugnada, y se determina error en la persona precisamente obligada. Por lo tanto, se den en tales parámetros, los cuales están, aparte ajenos de la litis; fuera de toda legalidad y en los parámetros y montos exagerados y fuera de mi posibilidad y capacidad económica, me deja en total estado de indefensión, tal como lo determina y deduce el artículo 450 del Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro Estado; pues pasa por alto el que tal primer precepto mencionado a la letra expone: “ARTÍCULO 443. (se transcribe).” (SIC).- -----

----- La actora incidentista ***** manifestó en
vía de agravio lo siguiente:-

(SIC) “A G R A V I O S: PRIMER AGRAVIO.- *Causa agravios a mi representada la resolución que se combate, en virtud de que el Juez inferior VIOLA CLARAMENTE LO CONTENIDO EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en relación con lo que estatuyen los diversos artículos 1, 105, 109, 112, 113 y 115 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, esto es así, si se toma en cuenta que la responsable al emitir la citada resolución no es congruente con lo peticionado y manifestado por mi representada en su escrito de fecha 28 de marzo del 2019, no es congruente con lo contestado por mi contraparte y no resuelve los puntos que fueron objeto de debate, sin pasar por alto que **NO ANALIZA, NI VALORA EN SU TOTALIDAD EL CAUDAL PROBAORIO APORTADOPOR LA SPARTES, ES DECIR, AL EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE SE COMBATE NO SE APEGÓ A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**, ya que como se insiste, no examino de manera completa el contenido del escrito antes mencionado, no analizo, ni valoro correctamente todo el caudal probatorio, especialmente porque al*

emitir su resolución simplemente fue omiso en velar por el interés superior del menor estipulado en nuestra carta magna; permitiéndome al efecto analizar las siguientes observaciones por mencionar algunas: **1.- El aquo valora erróneamente el caudal probatorio aportado por las partes y condena a mi representada la C. ***** al pago de una pensión alimenticia en favor de su menor hija por la cantidad de \$1600.00 (Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) mensuales, aun y cuando la menor ***** vive con ella, y esta es la única que ha venido proporcionando alimentos a dicha menor. 3.- El aquo determina que la guarda y custodia de la menor ***** será ejercida por el C. *****; aun y cuando la menor ***** vive con su madre, determinación que resulta totalmente contradictoria con lo establecido en el convenio de fecha 11 de junio del 2019 en donde fue escuchada la menor por los representantes del juzgado, la representación social adscrita y una profesionalista en psicología. 4.- El aquo en el cuerpo de la resolución que se combate realiza razonamientos refiriéndose a personas totalmente ajenas al juicio que nos ocupa, como lo son los nombre de *******

***. 5.- El aquo valora pruebas refiriéndose a hechos no pertenecientes a la litis, como lo es la**

existencia de una supuesta carpeta de investigación NUC.- *** supuestamente radicada en la Agencia del Ministerio Público del Sistema Penal Acusatorio, Adscrita a la Unidad de Investigación 5. 6.- El aquo realiza la transcripción de un convenio con clausulas totalmente a las establecidas en el convenio realizado entre las partes en fecha 11 de junio del 2019. Permitiendo al efecto transcribir la siguiente tesis para robustecer los argumentos antes esgrimidos: Época: Décima Época registro: 2005968 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Funete: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: I.4o.C.2 K (10a.) Página: 1772 **EXAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA PR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.** (se transcribe). **SEGUNDO AGRAVIO.- Causa agravios a mi representada la resolución que se combate, en virtud de que dicha determinación que es totalmente errónea, eso s se toma en cuenta, QUE NO ESTÁ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, razones estas por las cuales dicha resolución es totalmente VIOLATORIA DE SUS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN OLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,**en efecto el primero de los**

dispositivos antes mencionados contempla la garantía de audiencia, la que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado frente a los actos del poder público que tienen a privarlo de sus derechos e intereses; dentro de esta garantía se contienen diversas subgarantías que aseguran al gobernado contar con mecanismos que le permitan una adecuada defensa como lo es que , previo a la emisión del acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: 1. .- **La Notificación del Inicio del procedimiento y sus consecuencias.** 1. .- **La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finiquite la defensa.** 1. .- **La Oportunidad de alegar;** y 1. .- **El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.** Por lo tanto, si no se respetan estos requisitos se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es de evitar la indefensión del afectado. Por su parte el segundo de los preceptos constitucionales en cita se desprende que toda autoridad que emita un acto de molestia a la esfera jurídica del gobernado debe respetar los lineamientos constitucionales, a saber: **I.- Que el acto de molestia debe adoptar la forma por escrito. II.- El acto debe estar fundado. III.- El acto de molestia debe estar motivado.** Ahora bien, **LA FUNDAMENTACIÓN** es el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las

consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; los cuales deben ser señalados con toda exactitud, precisándose las fracciones, párrafos, los incisos y subincisos de los preceptos aplicables. Por su parte, **LA MOTIVACIÓN** de los actos de autoridad es la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal aplicable. De tal suerte, que los requisitos de fundamentación y motivación se suponen mutuamente, pues no es posible lógicamente citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta relación entre fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, esto es la adecuación del hecho al derecho. Luego entonces tenemos que en el presente caso no fue así, puesto que el aquo omite pronunciarse sobre todos los puntos que le fueron plantados, realizó una deficiente valoración de pruebas, así como también **UN DEFICIENTE RAZONAMIENTO LÓICO JURÍDICO Y ARITMÉRICO DE LAS CONSIDERACIONES, QUE LO LLEVARON AL RESULTADO DE LO ETRMINADO EN LA RESOLUCIÓN QUE SE COMBATE, LO CUAL SE TRDUCE EN UNA**

CLARA IMPOSIBILIDAD DE FORMULAR UNA ADECUADA DEFENSA, YA QUE AL EMITIR LA CITADA RESOLUCIÓN SE REIERE A HECHOS Y PERSONAS AJENAS A LA LITIS; sirven para robustecer los argumentos antes esgrimidos los criterios emitidos por los altos tribunales de la nación que me permito transcribir para su mayor apreciación: **SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.** De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro “PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMOS CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.” y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.” (se transcriben). En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento

de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades solo puedan hacer aquello para lo cual expresamente les facultan la leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época. Según consta en su tesis 160, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Página 175, de rubro “FUNDAMENACIÓN Y MOTIVACIÓN. (Época: Décima Época, Registro: 2005777, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2001, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.), Página: 2241). (se transcribe).” (SIC).- -----

----- Ninguna de las partes desahogó la vista de los agravios expresados por su contraparte.- -----

----- TERCERO.- Por razón de orden, se procede al estudio de los motivos de inconformidad que hace valer

el demandado incidentista ***** , a través de los cuales aduce: -----

1.- *Que la sentencia contraviene el principio de congruencia así como los artículos 112 fracciones III, 113, 114, 115 primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, ya que se valoraron las pruebas en perjuicio del demandante; y la resolución atenta contra los principios esenciales del proceso;*

2.- *Que la sentencia contraviene los artículos 126 Bis.; 252 Bis y 648 del Código de Procedimientos Civiles, ya que el juez pasó por alto el acta de mediación de **28 de mayo del 2018**, levantada ante la institución encargada de desahogar Medios Alternativos de Solución de Conflictos, en el cual, por mutuo acuerdo se determinó aportar por parte del actor, por concepto de pensión, a favor de su menor hijo, una cantidad de dinero acorde a sus posibilidades; pero además se contemplaron reglas de custodia y convivencia;*

3.- *Que el A- quo valoró las pruebas únicamente en beneficio de la demandada, al no contemplar ni tomar en cuenta las del actor, así como ni siquiera mencionarlas en la sentencia, contraviniendo los artículos 273, 275, 392, 409 y 412 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad;*

4.- *Que del fallo impugnado no se aprecia que el juez se haya preocupado por procurar, velar y salvaguardar los intereses de la menor hija de los contendientes en cuanto a la convivencia con su*

padre, pues no fijó regla de convivencia alguna; aun cuando la menor, al ser escuchada, expresó el deseo de convivir con su padre; que la demandada condiciona a sus padres (abuelos maternos de la menor) para que prohíban convivir con el padre de su menor hija, sin motivo legal; contraviniendo los principios de convencionalidad respecto a los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes, consagrados en los artículos 1°, 4° y 5 constitucionales; así como en los tratados internacionales, de los cuales México es parte;

6.- Contravención al artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, al establecer una pensión fuera de toda legalidad y en parámetros y montos exagerados y fuera de la posibilidad y capacidad económica, del deudor y que lo deja en estado de indefensión;

---- Los anteriores motivos de inconformidad **resultan parcialmente fundados**, por las siguientes razones: -----

---- En primer plano se estima que **asiste razón al recurrente** en el sentido de que el juez de origen infringió el principio de congruencia previsto por los artículos 112 fracciones III, 113, 114, 115 primer párrafo, en armonía con los diversos 126 Bis, 252 y 648 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, ya que, ciertamente, el juez al momento de decidir la incidencia motivo del presente recurso, no tomó en consideración

el convenio celebrado en el Centro de mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, celebrado el 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho entre los ahora contencientes***** y ***** , visible a foja 23 y 24 del expediente principal, mismo que se llevó a cabo al tenor de las siguientes cláusulas: -----

(SIC) “ ---- **PRIMERA:** Los mediados ***** y ***** , estamos de acuerdo en ejercer responsablemente la Patria Potestad sobre nuestra menor hija J.G.N.S, brindándole un buen ejemplo a través de nuestros actos y comportamiento..- -----

---- **SEGUNDA:** Los mediados ***** y ***** , están de acuerdo en que la Guarda y Custodia sobre la menor J.G.N.S, estará a cargo de la mediada ***** , quien se compromete a atender y cuidar la integridad física, emocional, psicológica y sexual de su menor hija, además de apoyarla en el desempeño de sus estudios. Lo mismo hará el mediado ***** , cuando la menor esté con el para efectos de la convivencia.- -----

---- **TERCERA:** Ambos mediados ***** y ***** , establecemos que la Pensión Alimenticia a que tiene derecho nuestra menor hija J.G.N.S, se cumplirá de la siguiente forma: -----

al A quo a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, y no lo hizo según se advierte de la sentencia recurrida, irrogando con ello el aspecto de inconformidad que señala el apelante.- -----

---- En otro aspecto, referente a que el A quo contraviene los artículos 273, 275, 392, 409 y 412 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, porque unicamente valoró las pruebas en beneficio de la demandad incidentista, al no contemplar ni tomar en cuenta las del actor incidentista (recurrente), pues ni siquiera la menciona en la sentencia; dicho motivo de agravio **resuta parcialmente fundado**.- -----

---- En efecto, ello es así porque como bien lo sostiene el inconforme, del considerando segundo del fallo recurrido se observa que el juez de origen si bien valoró las pruebas aportadas por ambas partes, así como las documentales que obran en autos del expediente principal, no menos cierto lo es que no hizo referencia a todas las probanzas aportadas por el aquí apelante, en virtud de que el juzgador no tomó en cuenta la testimonial ofrecida por el demandado incidentista a cargo de los señores

***** cuyo desahogo obra a fojas de la 23 a la 27 del cuaderno de pruebas del demandado incidentista; asimismo, la juez tampoco tomó en consideración el informe rendido por la Directora Jurídica y Seguridad Patrimonial del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, visible a fojas de la 43 a la 69 del cuaderno de pruebas del demandado incidentista; infringiendo con ello el principio de valoración de pruebas en perjuicio del aquí apelante; comportamiento del juzgador que infringe el derecho humano y fundamental a una tutela judicial efectiva previsto por el numeral 17 constitucional, en virtud de que la obligación que le impone el numeral 392 del código adjetivo civil que previene que el Juez o Tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, debiendo, además, observar las reglas especiales que la ley fije; y que la valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia.-

---- Lo anterior porque, aún y cuando el juez valoró la prueba confesional ofrecida a cargo de la actora

incidentista ***** ***** ***** , concediéndole valor probatorio pleno conforme al artículo 393 del citado Ordenamiento Civil; lo cierto es que la misma carece de valor probatorio en virtud de que el juez no firmó dicha probanza, según se advierte a foja 39 del cuaderno de pruebas del demandado incidentista no obstante que el numeral 12 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad establece que actuaciones judiciales que consten por escrito, deberán ser firmadas, bajo pena de nulidad, por los servidores públicos a quienes corresponda realizarlas, dar fe o certificar el acto; mientras que el diverso numeral 27 señala que los magistrados del Supremo Tribunal y los jueces presidirán los actos de prueba. Luego entonces, al no advertir dicha circunstancia el A quo, infringe el referido principio de valoración de pruebas, máxime cuando es una cuestión no imputable a las partes.-

---- No obstante lo anterior, se pondera que a ningún fin práctico conduciría ordenar la reposición del procedimiento, pues ello iría en detrimento de una pronta y expedita impartición de justicia o evitar un retardo injustificado en la solución del presente controvertido, si

se tiene en cuenta que los aspectos que el oferente pretende demostrar con la referida prueba confesional, tales como: la celebración del matrimonio con su contraparte; la procreación de una hija; el acta de matrimonio; que su contraria trabajaba como empleada doméstica; que celebraron convenio en el centro de mecanismos para la Solución de Conflictos; ello se encuentra acreditado con otras pruebas que obran en autos y que fueron aportadas por las partes a saber: acta de matrimonio de los contendientes, así como acta de nacimiento de la menor ***** visibles a fojas 10 y 11 del expediente principal; convenio celebrado el 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho entre los ahora contencientes***** y ***** visible a foja 23 y 24 del expediente principal, y al que ya se hizo referencia en líneas precedentes; así como con el contenido integral del estudio socioeconómicos rendidos en autos y practicado a la señora ***** en el que se hace referencia que la entrevistada es empleada doméstica (foja 82 del cuaderno incidental).-

---- Por lo que respecta al argumento que hace valer el apelante, de que el juez contraviene los principios de convencionalidad respecto a los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes, consagrados en los artículos 1°, 4° y 5 constitucionales; así como en los tratados internacionales, de los cuales México es parte, en virtud de que del fallo impugnado no se aprecia que el juez se haya preocupado por procurar, velar y salvaguardar los intereses de la menor hija de los contendientes en cuanto a la convivencia con su padre, pues no fijó régimen de convivencia alguna; aun cuando la menor, al ser escuchada, expresó el deseo de convivir con su padre; que la demandada condiciona a sus padres (abuelos maternos de la menor) para que prohíban convivir con el padre de su menor hija, sin motivo legal; dicho argumento **resuta fundado**.- -----

---- En efecto, asiste razón al recurrente en el aspecto que hace valer, si se toma en consideración que aún y cuando el juez en el punto resolutivo cuarto del fallo recurrido, sostuvo lo siguiente: -----

(SIC) “CUARTO.- Se decretan las reglas de convivencia de ** * * * * *, con su hija K.S.M., en la forma y términos que se señalan en el considerando SEXTO de**

esta resolución.” (SIC) (reverso de foja 198 del cuaderno incidental) -----

---- Al respecto se considera que tal determinación es a todas luces carente de sustento jurídico, toda vez que la resolución impugnada no contiene considerando sexto; situación que denota una falta de cuidado o ligereza en el pronunciamiento de la resolución, con infracción del principio de congruencia previsto en el ordenamiento 113 del código adjetivo civil que establece que las sentencias deberán ser congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, y resolver todos los puntos que hayan sido objeto del debate.- -----

---- En ese sentido, tomando en consideración que la eficacia del derecho humano y fundamental de visita y convivencia de los hijos con sus progenitores, reconocido por el artículo 4° constitucional tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en

ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores; por lo que en aras de ese supremo derecho que tienen los niños y evitar un desequilibrio emocional, el juez debió establecer un régimen de convivencia acorde al interés superior de la menor K.S.M., pues no debe perderse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra principios liberales dentro de la regulación familiar, por lo que, en principio, corresponde a los integrantes del núcleo social básico acordar su operatividad, dinámica y, sobre todo, la solución de sus conflictos internos. Así, al acudir ante una instancia jurisdiccional a solucionar sus controversias, se presume que su capacidad para solucionarlos se ha visto rebasada, por tanto, acuden al Estado como última ratio, razón por la cual, el Estado debe procurar limitarse a solucionar la controversia concreta. En este sentido, la producción legislativa ha facultado a las autoridades para actuar oficiosamente ante problemáticas familiares distintas a las que se pusieron a su consideración, su actuar debe guiarse por el principio de mínima intervención posible; por lo que, tratándose de juicios en los cuales se ventilen derechos de familia, incluidos los

relacionados con menores, el juzgador, en principio, deberá limitarse a resolver la controversia familiar puesta a su consideración, sin problematizar aspectos que corresponde resolver a la familia conforme a su libertad configurativa y, únicamente, imponer medidas extra litis, cuando se haya visto superada la capacidad conciliatoria del núcleo familiar ante una controversia real que ponga en entredicho un bien jurídico, y no cuando la controversia sea sólo una conjetura o pueda resolverse conforme a la libertad familiar. En consecuencia, se pondera que si en la situación de la especie obra en autos el convenio celebrado entre los contendientes ante el Centro de mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, el 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho, visible a foja 23 y 24 del expediente principal, y en cuya cláusula cuarta se estableció lo siguiente: -----

(SIC) “---- CUARTA: Los mediados *****
 Y ***** acordamos respecto a la convivencia a que tiene derecho la menor J.G.N.S., con el mediado se cumplirá de la siguiente forma: --
 a) Acuerdan los mediados que la convivencia se llevará a cabo cada semana los domingos a partir de las 11:00 de la mañana, en que la menor acudirá al domicilio de los abuelos paternos, que es donde actualmente vive el mediado, para regresar al

domicilio de los abuelos maternos, donde vive la mediada, a más tardar a las 08:00 de la noche.

b) Cualquier cambio que surja respecto de la convivencia se comunicará con el mediado, este permanecerá en buen estado lo que dure la convivencia. (SIC) -----

---- Se considera que el A quo debió de tomar en consideración dicho acuerdo de voluntades, por tratarse de un convenio que tiene la categoría de cosa juzgada acorde a lo previsto por el numeral 126 Bis del código adjetivo civil, en virtud de que se encuentra certificado y ratificado ante el Director del Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial con sede en esta ciudad; y, se reitera, obligaba al A quo a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, pues no obra en autos elemento de prueba que demuestre la modificación de dicho acuerdo de voluntades; máxime cuando el A quo en el considerando tercero del fallo recurrido si bien hace referencia al aspecto relativo a la convivencia entre la citada menor con su padre, no debe perderse de vista que tomó de base el régimen decretado provisionalmente mediante audiencia celebrada el 20 veinte de octubre de 2017 dos mil diecisiete, es decir, anterior al convenio de referencia y por lo mismo no resutan válido pues lo correcto es que estableciera ese

régimen conforme al convenio celebrado el 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho.- -----

---- Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 49, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 1289, que a la letra dice: -----

“MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. De una sana interpretación del artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, se aprecia que la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido en ese numeral, que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores. Es por eso que el propio

numeral contiene normas tendentes a lograr dicha función, ya que el goce y disfrute de esos derechos, no podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición de uno de los padres, la autoridad jurisdiccional determinará lo que más convenga al interés preponderante del menor que sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido la patria potestad. Como se advierte, la teleología del artículo 417, en comento, se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán derecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para que se suspenda el ejercicio del derecho de visita y convivencia, que exista peligro para el menor, caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior del menor, contra alguno de los progenitores.” -----

---- Así como el diverso criterio de jurisprudencia por reiteración, publicado en la página 1085 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril

de 2011, Materia Civil, Tesis: II.2o.C. J/30, del tenor literal siguiente: -----

“CONVIVENCIA, RÉGIMEN DE. PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA SU CORRECTO DESARROLLO ENTRE MENORES Y SUS PROGENITORES, CUANDO ÉSTOS SE ENCUENTRAN SEPARADOS O

*******S.** En observancia irrestricta a las garantías individuales que a favor de los menores consagran los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 1o. al 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de Norteamérica y ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, la cual es obligatoria en cuanto a su observancia por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado, según lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, atendiéndose incluso a las prevenciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, en cuya exposición de motivos se establece la necesidad de allegarse una legislación encaminada a la protección de los derechos de los menores, que a su vez fuesen tutelados no solamente por instituciones especializadas y específicas, sino por los tribunales de justicia y toda la sociedad, para integrarlos plenamente a ella y permitirles el goce

pleno de sus derechos como seres humanos; es indiscutible y preponderante que para determinar prudente y objetivamente un régimen de convivencia entre los menores con sus progenitores, que por alguna razón se encuentren separados o *****s, los órganos jurisdiccionales y cualquier autoridad deberán tener en cuenta los referidos principios jurídicos, así como que respecto de la patria potestad, guarda y custodia, y el derecho a un régimen de visitas y convivencias, el artículo 4.205 del Código Civil del Estado de México previene que en caso de separación de quienes ejerzan la patria potestad, el Juez habrá de resolver lo conducente en derecho en torno a la controversia suscitada teniendo siempre en cuenta lo mejor para los intereses de los hijos menores de edad. En orden con lo anterior, es indispensable precisar que en los casos de desintegración familiar provocados por la separación de los cónyuges, los hijos resultan ser los menos responsables y, sin embargo, son los que más la resienten en el ámbito psicológico, social y económico. Luego, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños de ser amados y respetados, sin condición alguna, sus progenitores deben ejercer la guarda y custodia en un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto, recurriéndose a terapeutas especializados en salud mental, con la única finalidad de entablar una mejor relación de convivencia con sus menores hijos, despojándose de todo resentimiento que llegase a perjudicarles, de modo tal que la

convivencia de los infantes con uno y otro de sus padres, no debe generarles ningún desequilibrio emocional sino, por el contrario, que al convivir con cada uno de ellos se sientan queridos, respetados y protegidos, nunca manipulados o utilizados para satisfacer diversos intereses. Entonces, en aras de prevenir algún posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que lo hubiere, los padres deben asumir una responsabilidad absoluta respecto de sus menores hijos, pues el hecho de que se encuentren *****s o separados de ningún modo implica que no puedan ser excelentes guías paternales, incluso mejores que si vivieran juntos, por cuanto se encuentran obligados a compensar el terrible inconveniente que a los niños les produce la separación de aquéllos. Por consiguiente, en términos de lo que estatuye el numeral 4.203 del código sustantivo en cita, para ayudar a los niños a que no sufran incertidumbre alguna respecto de su futuro y, por el contrario, que crezcan tranquilos y sanos en todos los ámbitos personales y ante la sociedad, es menester que los menores sean protegidos, y que sus progenitores actúen honesta y responsablemente en cuanto a sus sentimientos filiales, y así, prescindirán de egoísmos al disputarse la guarda y custodia, y en especial en cuanto al derecho de los aludidos infantes a convivir con sus progenitores, fortaleciéndose entre ellos los lazos de amor y respeto. De ahí que los referidos menores, no deben ser inmiscuidos en los conflictos de sus padres, quienes deben asumir

responsablemente su misión, con la mejor disposición, para seguir conviviendo con sus menores hijos, educándolos consciente e integralmente, incluso, inculcándoles valores y principios conductuales, pues la paternidad nunca termina con una separación o el divorcio, por lo que ambos deben permitir que se lleve a cabo una convivencia en beneficio evidente de sus hijos, libre de celos, resentimientos o envidias, fungiendo como verdaderos padres, plenos e íntegros, inculcándoles sentimientos de amor, inspiración, superación, esperanza y, sobre todo, de responsabilidad, evitándose así, en la medida de lo posible, cualquier conflicto emocional, personal o judicial que involucre a dichos niños, por lo que, a partir de esa referencia podrán organizar su futuro, pues no tienen la mínima opción de desampararlos, por su corta edad. En ese orden, y de acuerdo con el artículo 4.207 del Código Civil del Estado de México, las anteriores reflexiones encuentran sustento en el hecho de que el derecho de familia es un conjunto de normas jurídicas dirigidas a regir la conducta de los miembros del grupo familiar entre sí, propiciándose así las condiciones para que se desarrollen las relaciones conyugales y consanguíneas constituidas por un sistema de derechos y obligaciones, poderes, facultades y deberes entre consortes y parientes e, incluso, tales facultades y deberes de carácter asistencial surgen entre los padres, hijos, parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, etcétera), y tienen como

objetivo tutelar y fortalecer las relaciones y los derechos entre ascendientes y descendientes, sujetándose a las normas fundamentales establecidas para la protección de los hijos.”.- -----

---- Por último, en lo relativo a que el juez violó lo previsto por el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, al establecer una pensión fuera de toda legalidad y en parámetros y montos exagerados y fuera de la posibilidad y capacidad económica, del deudor, lo cual lo deja en estado de indefensión; **resulta igualmente fundado** dicho alegato, por lo siguiente.- -----

---- Consta en autos que los ahora inconformes celebraron convenio en el Centro de mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, el 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho, mismo que obra a foja 23 y 24 del expediente principal, y en el que, en lo relativo al rubro de alimentos, convinieron en la cláusula tercera lo siguiente: -----

(SIC) “---- TERCERA: Ambos mediados ***
 ***** Y *****
 establecemos que la Pensión Alimenticia a que tiene derecho nuestra menor hija J.G.N.S, se cumplirá de la siguiente forma: -----**

**a) La pensión estará a cargo del mediado

 , quien se obliga a a**

proporcionarse como pensión alimenticia, la cantidad de \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N..) por semana a partir del día 03 o 03 de junio entregándose personalmente en forma directa los sábados o domingos de cada semana, para tal efecto la mediada le firmará un recibo cada que el mediado le entregue la pensión.

b) En lo que respecta a los gastos escolares de la menor que incluye, inscripciones, útiles y uniformes, los mediados acuerdan cada uno hacerse cargo del 50% cincuenta por ciento.

Los gastos médicos, acuerdan los mediados que ambos se harán cargo de los costos al 100% cuando la menor no pueda ser atendida por el Seguro Popular dependiendo con quien de los dos se encuentre la menor cuando se enferme.

d) La compra de ropa y zapatos de la menor, estará a cargo del mediado.” (SIC)

---- Luego entonces, al igual que lo pactado en lo relativo al rubro de régimen de convivencia, obligaba al A quo a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, pues tampoco obra en autos elemento de prueba que demuestre la modificación de dicho aspecto por parte de los contendientes; sin que obste a lo anterior el hecho de que el A quo en el considerando cuando de su fallo, si bien contempló lo relativo a la pensión alimenticia, la forma en que aborda dicho aspecto no es correcta si se tiene en cuenta que al referirse a la madre menciona el nombre del padre y viceversa, al referirse al progenitor

señala el nombre de la madre; mientras que en cuanto a la menor la señana como K.S.M cuando lo correcto es J. G. N. S. situaciones que generan falta de atención o cuidado en la emisión de las resoluciones, lo cual no es permisible pues ello atenta contra el derecho humano y fundamental a una tutela judicial efectiva como ya se indicó, y para evidencia de lo señalado, se advierte que el juez en el referido considerando cuarto sostuvo, en lo conducente, lo siguiente: -----

(SIC) *“CUARTO.- En lo que respecta a la pensión alimenticia que debe recibir la menor **K.S.M. por parte de su padre *******, y al contar con los elementos necesarios para su determinación, ya que se cuentan con los estudio socio-económico realizados a las partes y a la menor procreada por éstos, la cual es la prueba idónea para conocer las necesidades reales de la infante, se determina que se tomarán los dictámenes mencionados con antelación, para establecer las necesidades reales de la menor en comento, mismo que ya fueron valorados en el cuerpo de esta resolución. Por lo cual, de acuerdo a lo previsto en el dispositivo 444 de la Ley Adjetiva Civil, para la operancia de este rubro, es necesario que se demuestren los siguientes elementos: a) El título en cuya virtud se piden; b) La posibilidad de quien deba darlos; y, c).- La urgencia de la medida; Primer elemento, por lo que hace a dicha menor, con su acta de nacimiento que obra dentro del expediente principal, se comprueba el carácter de hija del actor-incidentista **y de la señora ******* y en virtud de ese título acude a través de su progenitora. Segundo elemento, éste se acredita con el informe rendido por el C. JOEL*

*****), en su carácter de Representante Legal de la empresa *****), S.A. DE C.V., R.F.C. ***** de fecha uno de junio del año en curso, mediante el cual informa que *****), labora para dicha empresa, percibiendo un sueldo neto quincenal por la cantidad de \$2,200.00(dos mil doscientos pesos 00/100 m.n.) sin prestaciones extraordinarias, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 9:00 a.m. A 2:00 p.m. y por las tardes si las necesidades de la empresa lo ameritan lo cual no es obligatorio, que corre agregado a los autos de éste incidente (foja 307), de donde se desprende que el demandado tiene posibilidad económica para cumplir con su obligación alimentaria en favor de su acreedora. Informe al cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido por el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor. Tercer elemento, no resulta de indispensable demostración por existir en su favor, pues como ya se dijo, la presunción de necesitarlos derivada de su minoría de edad, y que por tanto no puede sufragar por sí misma su subsistencia. (...)

Al respecto debe mencionarse que la menor **K.S.M.**, actualmente cuenta con 4 años de edad, que cuenta con el servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por parte de su padre, que habita en casa de alquiler con su madre, siendo un total de 2 personas las que viven en dicho domicilio; circunstancias que se acredita con lo referido por la especialista en Trabajo Social, Adscrita al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial (CECOFAM).

Ahora bien respecto a las necesidades de alimentos de la menor **K.S.M.** la LIC. *****), especialista en Trabajo Social, Adscrita al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial (CECOFAM), en su estudio socio-económico, el cual obra en autos a fojas 215 a la 226, refiere y se aprecia que los gastos mensuales del menor son los siguientes:

CONCEPTO	GASTOS DE LA MENOR POR MES
Alimentación, productos de higiene en el hogar y personal	\$2,058.58
Servicios Básicos y adicionales	\$1,904.07
Educación básica	\$482.40
Vestimenta y calzado	\$699.00
Transporte	\$600.00
TOTAL	\$5,744.05

Ahora bien, tomando en cuenta el gasto mensual que la actora refiere realizar para cubrir los alimentos de su menor hija, en los conceptos de Alimentación, productos de higiene en el hogar y personal, Servicios Básicos y adicionales, educación básica, vestido, calzado y transporte, la señora requiere para su menor hija **K.S.M.** la cantidad aproximada de \$5,744.05 (cinco mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 m.n), de manera mensual y la cantidad que el acreedor le otorga mensualmente es por la cantidad de \$1,600.00 (un mil setecientos pesos 00/100 M.N.) según los comprobantes de deposito que obran en autos; y que **la señora *******, **madre de la menor en comento**, le corresponde otorgar el 50% de dichos ingresos, de conformidad con lo en los numerales 281 y 288 del Código Civil vigente, que establecen que los padres están obligados a otorgar alimentos a su hijos, y esta debe ser proporcionada acorde a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos, pero la proporción de éstos no podrá ser un porcentaje inferior al 30 por ciento ni mayor del 50 por ciento del sueldo o salario del deudor alimentista. Por otro parte, se considera que la

menor en cita, se encuentran percibiendo la suma de \$1,600.00 (un mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) mensuales, aunada a la cantidad que recibe con motivo de su trabajo como comerciante, misma que la prenombrada informó a la especialista del Cecofam, siendo ésta la cantidad mensual de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), por lo que debe contribuir de manera proporcional, que sumada a la que otorga el demandado, se considera suficiente para cubrir las necesidades su menor hija antes citada.

Lo anterior es así, pues si bien ésta cantidad es menor a la que erogara la actora por concepto de alimentos para su menor hija, también lo es que, -los gastos antes referidos son aproximados, por lo que no debe atenderse a un procedimiento estrictamente matemático; -Que se trata de alimentos para una sola menor; -Que ambos padres tiene la obligación de otorgar alimentos a su menor hija, de acuerdo a sus posibilidades.” (SIC) (foja 194 vuelta a 198 frente del cuaderno incidental). -----

---- Como puede verse, el Juez de origen lejos de atender a la categoría de cosa juzgada que tiene el señalado convenio por disposición del numeral 126 Bis del cuerpo de normas en consulta, en virtud de encontrarse certificado y ratificado ante el Director del Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial con sede en esta ciudad, y ello obligaba al A quo a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; mayormente cuando en la clausula octava del mismo se precisa que los mediados ***** y ***** , acordaron suscribir el presente documento despues de

haber leído y entendido en todas y cada una de sus partes y estar de acuerdo en someterse a lo que ahí quedó establecido; y por ello el juzgador debió reiterar tal circunstancia en el considerando y resolutive relativos a ese tópico; sin que obste a lo anterior en hecho que el juez tomara en consideración los estudios socio económicos practicados a ambas partes, el informe rendido que revela la posibilidad y capacidad económica del deudor alimentista, así como las circunstancias personales y necesidades de la acreedora J.G.N.S.- -----

---- En apoyo a lo anterior cobra aplicación por el aspecto que interpreta, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicado en la página 2164 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Materias Civil, Tesis: VII.2o.C.103 C (10a.), Décima Época, del tenor literal siguiente: -----

“CONVENIO CELEBRADO ANTE EL CENTRO DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. AL TENER LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA SE HOMOLOGA A UNA SENTENCIA EJECUTORIADA DE NATURALEZA CIVIL EN

SENTIDO ESTRICTO Y NO MERCANTIL, AUNQUE TENGA SU ORIGEN EN UN CONFLICTO DE ESTA MATERIA.

De una interpretación de los artículos 7 de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del Estado de Veracruz y 338 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, se obtiene que el convenio que se celebra ante el Centro de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado de Veracruz o en sus unidades regionales, al tener la categoría de cosa juzgada, en homologación a una sentencia ejecutoriada de materia civil, no le da la característica de un documento ejecutivo mercantil que lleve aparejada ejecución conforme al artículo 1391, fracción I, del Código de Comercio; pues lo que se llevó a cabo ante el órgano de mediación, fue un acuerdo de voluntades estrictamente civil y no mercantil derivado de un acto de comercio. Por lo que, conforme al artículo 206 QUATER del citado código adjetivo civil, ante su incumplimiento, las partes deben regirse por las disposiciones relativas a la ejecución de convenios judiciales contenidas en dicho ordenamiento legal, que contempla acudir ante el Juez competente conforme a las disposiciones relativas a la ejecución de convenios judiciales contenidas en éste.”.- -----

---- **CUARTO:**- Por lo que respecta al diverso recurso de apelación interpuesto por la actora

incidentista***** , **el agravio primero** que hace valer y en el que aduce que el juez violó en su perjuicio los artículos 17 constitucional y 1º, 105, 109, 112, 113 y 115 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, por los siguientes motivos:

- El Juez no es congruente con lo alegado por las partes y no resuelve los puntos que fueron objeto de debate;
- No analiza, ni valora en su totalidad el caudal probatorio aportado por las partes, ni se apegó a los principios de congruencia y exhaustividad
- Fue omiso en velar por el interés superior de la menor hija de los contendientes, pues condena a la actora al pago de una pensión alimenticia en favor de su menor hija J.G.N.S. por la cantidad de \$1600.00 (Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) mensuales, aun y cuando la menor vive con ella y ha venido proporcionándole alimentos a dicha menor:
- Determinó que la guarda y custodia de la menor será ejercida por el padre, aun y cuando la menor J.G.N.S. vive con su madre, lo cual contraviene lo

pactado en audiencia de 11 once de junio del 2019 dos mil diecinueve en donde fue escuchada la menor;

- Realizó razonamientos refiriéndose a personas totalmente ajenas al juicio al mencionar los nombre de:

****”,
,

- Valoró pruebas ajenas a la litis, como lo es la carpeta de investigación NUC.- *****radicada en la Agencia del Ministerio Público del Sistema Penal Acusatorio, Adscrita a la Unidad de Investigación 5; y,

- Realizó transcripción de un convenio con clausulas totalmente a las establecidas en audiencia de 11 once de junio del 2019 dos mil diecinueve;

---- Las manifestaciones anteriores **resultan fundadas**, por lo siguiente: -----

---- En primer término, se pondera que **asiste razón a la recurrente** en cuanto a que la resolución impugnada no es congruente con lo alegado por las partes y no

resuelve ajustado a derecho los puntos que fueron objeto de debate, ya que, del contenido íntegro de la misma se advierte que el juez en los considerandos segundo y cuarto refiere nombre de personas ajenas al juicio, y al referirse al nombre de la menor, la señala de manera incorrecta o con distintas iniciales de su nombre; y al referirse a la madre menciona el nombre del padre y viceversa, lo cual como ya se ha dicho denota una notoria falta de atención o cuidado o ligereza en el pronunciamiento de la misma, contraviniendo los principios de congruencia, exhaustividad y tutela judicial efectiva en detrimento de los justiciables, lo cual no resulta válido.- -----

---- Prueba de lo anterior y a manera de ilustración lo es el considerando cuarto, así como los puntos resolutivos del fallo en el que el resolutor, en lo conducente sostuvo: -----

(SIC) *“CUARTO.- En lo que respecta a la pensión alimenticia que debe recibir la menor K.S.M. por parte de su padre ***** *****, ..., se comprueba el carácter de hija del actor-incidentista y de la señora ***** , Al respecto debe mencionarse que la menor K.S.M., actualmente cuenta con 4 años de edad, ... Ahora bien respecto a las necesidades de alimentos de la*

menor K.S.M. ... y que la señora ***** madre de la menor en comento, en consecuencia, es prudente ratificar y condenar al señor ***** , al pago de una pensión alimenticia a favor de su menor hija de nombre K.S.M., ... En consecuencia, requiérase mediante notificación personal al señor ***** , a efecto de que otorgue cumplimiento voluntario a ésta determinación, y haga el pago de la cantidad de por concepto de pensión alimenticia decretada a favor de su menor hija K.S.M.,

RESUELVE:

PRIMERO.- HA PROCEDIDO PARCIALMENTE el INCIDENTE SOBRE GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA Y FIJACIÓN DE REGLAS DE CONVIVENCIA, promovido por ***** , dentro del expediente número 01136/2016, relativo al Juicio de Divorcio, promovido por *****; en consecuencia:

SEGUNDO.- Se determina que la guarda y custodia de la menor K.S.M., será ejercida por su Madre ***** pero ambos padres conservarán la Patria Potestad sobre sus hijas.

TERCERO.- Se reconoce el derecho de convivencia de ***** , con su hija K.S.M.

CUARTO.- Se decretan las reglas de convivencia de ***** , con su hija K.S.M., en la forma y términos que se señalan en el considerando **SEXTO** de esta resolución.

*QUINTO.- Se ordena la realización de la asistencia psicológica a *****y ***** , progenitores de la menor en cita, como se precisó en el considerando sexto de ésta resolución.*

*SEXTO.- Se condena al señor ***** , al pago de una pensión alimenticia a favor de su menor hija de nombre K.S.M., por la cantidad de (...)*

*SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria, requiérase mediante notificación personal al señor ***** , a efecto de que otorgue cumplimiento voluntario a ésta determinación, (...). “*

(SIC)

---- Como puede verse, el A quo hace referencia a una menor K.S.M de cuatro años de edad, a sí como a otro menor de nombre ***** , cuando en el caso la acreedora lo es J.G.N.S., y en la actualidad cuenta con 16 dieciséis años de edad, según se desprende de la copia certificada del acta de sus nacimiento visible a foja 21 del expediente principal; y por otra parte reconoce el derecho de guarda, custodia y convivencia así como la condena de alimentos a la actora incidentista cuando debió hacerlo al demandado *****; sin pasar inadvertido que además menciona nombre de personas ajenas a los que obra en autos , tales

como.*****
 ***** (fojas 186 vuelta, 188 reverso, y
 de la 192 a la 198 del cuaderno incidental.- ---
 ---- Asimismo, **asiste razón** a la recurrente en cuanto a
 que el juez indebidamente condenó a la actora
 incidentista al pago de una pensión alimenticia en favor
 de su menor hija J.G.N.S., aun y cuando la menor vive
 con ella y ha venido proporcionándole alimentos a dicha
 menor; aspecto que se considera **fundado**, pues lo
 correcto es que dicha condena debió ser a cargo del
 señor*****,
 como bien lo alega al
 apelante.- -----

---- En otro aspecto, del fallo recurrido se observa que el
 juez indebidamente determinó que la guarda y custodia
 de la menor será ejercida por el padre, aun y cuando la
 menor J.G.N.S. vive con su madre, lo cual contraviene lo
 pactado en audiencia de 11 once de junio del 2019 dos
 mil diecinueve en donde fue escuchada la menor; y al
 respecto se estima que **igualmente asiste razón** en el
 aspecto que hace valer ya que, del contenido integro de
 la referida audiencia, visible a fojas de la 69 a la 71 del
 cuaderno incidental se advierte que la menor manifestó
 vivir con su progenitora y abuelos maternos, por lo que la

guarda y custodia debió concederse a dicha actora
incidentista.- -----

---- En cuanto a que el juez valoró pruebas ajenas a la
litis, como lo es la carpeta de investigación NUC.-

*****radicada en la Agencia del Ministerio Público del
Sistema Penal Acusatorio, Adscrita a la Unidad de
Investigación 5; igualmente **asiste razón** a la
disconforme, en virtud de que, efectivamente de autos no
se advierte ofrecimiento alguno de dicho elemento de
prueba por parte de la apelante, infringiendo con ello el
principio de congruencia previsto por los numerales 113 y
115 del código adjetivo civil vigente en la entidad.- -----

---- Por último, en lo atinente a que el juez realizó
transcripción de un convenio con cláusulas totalmente a
las establecidas en audiencia de 11 once de junio del
2019 dos mil diecinueve; **igualmente asiste razón**, toda
vez que del fallo impugnado se observa que si bien el
juez hizo referencia a la audiencia celebrada el 20 veinte
de octubre de 2017 dos mil diecisiete, con objeto de
dilucidar provisionalmente lo relativo a los rubros de
convivencia y alimentos de la menor hija de los
contendientes (reverso de la foja 193 del cuaderno
incidental); lo cierto es que al obrar en autos el

convenio celebrado por los ahora recurrentes en el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, el 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho, mismo que obra a foja 23 y 24 del expediente principal, y en el que, se precisó lo relativo al rubro de guarda, custodia, convivencia y alimentos de la menor acreedora; ello obligaba al A quo a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, pues acorde a lo previsto por el numeral 126 Bis del código adjetivo civil adquiere la categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia ejecutoria, máxime cuando se encuentra certificado y ratificado ante el Director de dicho Centro con sede en esta ciudad; y no obra en autos elemento de prueba que demuestre la modificación de dichos aspectos por parte de los contendientes; como quedó precisado al darse respuesta a los agravios del demandado incidentista.- ----

---- El **segundo agravio** formulado por la inconforme, en el que aduce que el fallo no está debidamente fundado ni motivado y por ello el juez violó los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; se estima que **asiste razón**, en virtud de los diversos aspectos que han quedado precisado en el cuerpo de esta ejecutoria al darse respuesta a los agravios formulados por ambas partes, y

que ponen de relieve que el juez dirimió la controversia tomando en consideración aspectos y personas ajenas a la litis, señalando nombres y edad distintas de la menor de edad involucrada en el juicio; valoró pruebas no ofrecidas por las partes y los puntos resolutiveos no son congruente con las pretensiones deducidas oportunamente por las partes; y refirió el nombre de las partes de manera inversa, esto es, que a la madre lo señaló como el padre y viceversa; lo cual no es permisible y trasciende al resultado del fallo ya que ello origina con sobrada razón, la modificación del fallo, como más adelante se precisará, para efecto de que los puntos resolutiveos sean congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente por ambos contendientes.- -----

---- Bajo las consideraciones que anteceden y de conformidad con lo previsto por el artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles, ante lo parcialmente fundado de los motivos de agravio expresados por ***** y lo fundado de los agravios formulados por la también apelante ***** deberá modificarse la sentencia del del 27 veintisiete de febrero de 2020 dos

mil veinte, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, para que ahora en debida reparación a los agravios causados a ambas partes, para que en sus puntos resolutivos del segundo al séptimo queden de la siguiente manera: -----

“SEGUNDO.- Se determina que la guarda y custodia de la menor J.G.N.S., será ejercida por su madre *****; **conservando abos padres el ejercicio de la Patria Potestad sobre su hija.**

TERCERO.- Se reconoce el derecho de convivencia del señor ***** con su hija J.G.N.S.

CUARTO.- Se decretan las reglas de convivencia de la menor J.G.N.S con su padre ***** las establecidas en la cláusula cuarta del convenio celebrado en el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, el 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho, en los siguientes términos: “---- CUARTA: Los mediados ***** Y ***** acordamos respecto a la convivencia a que tiene derecho la menor J.G.N.S., con el mediado se cumplirá de la siguiente forma:

a) Acuerdan los mediados que la convivencia se llevará a cabo cada semana los domingos a partir de las 11:00 de la mañana, en que la menor acudirá al domicilio de los abuelos paternos, que es donde actualmente vive el mediado, para regresar al

domicilio de los abuelos maternos, done vive la mediada, a más tardar a las 08:00 de la noche.

b) Cualquier cambio que surja respecto de la convivencia se comunicará con el mediado, este permanecerá en buen estado lo que dure la convivencia.”

QUINTO.- Se ordena la realización de la asistencia psicológica a ***** y *****
progenitores de la menor en cita, como se precisó en el considerando sexto de ésta resolución.

SEXTO.- Se **condena** al señor *****al pago de una pensión alimenticia a favor de su menor hija J.G.N.S., en los términos establecidos en la cláusula tercera del referido convenio celebrado en el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, el 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho, misma que literalmente señala:
“TERCERA: Ambos mediados *** Y ***** establecemos que la Pensión Alimenticia a que tiene derecho nuestra menor hija J.G.N.S, se cumplirá de la siguiente forma:**

a) La pensión estará a cargo del mediado ***** quien se obliga a a proporcioonar como pensión alimenticia, la cantidad de \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N..) por semana a partir del día 03 o 03 de junio entregándose personalmente en forma directa los sábados o domingos de cada semana, para tal efecto la mediada le firmará un recibo cada que el mediado le entregue la pensión.

b) En lo que respecta a los gastos escolares de la menor que incluye, inscripciones, útiles y uniformes, los mediados acuerdan cada uno hacerse cargo del 50% cincuenta por ciento.

c) Los gastos médicos, acuerdan los mediados que ambos se harán cargo de los gastos al 100% cuando la menor no pueda ser atendida por el Seguro Popular dependiendo con quien de los dos se encuentre la menor cuando se enferme.

d) La compra de ropa y zapatos de la menor, estará a cargo del mediado.”

SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria requiérase mediante notificación personal al señor ***** a efecto de que de cabal cumplimiento a lo contenido ante el referido Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a las reglas de la ejecución forzosa” debiendo quedar intocado en sus demás partes el fallo recurrido.- -----

----- De conformidad con lo previsto en el artículo 139 parte final, en armonía con el 130, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles, en virtud de que cada uno de los litigantes resulto vencido en parte y vencedor en parte, no deberá hacerse condena al pago de costas procesales de segunda instancia, debiendo quedar compensadas.- -----

----- Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 105

fracción III, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 926, 947
fracción VII, y 949 del Código de Procedimientos Civiles
y se:- -----

----- R E S U E L V E -----

----- **PRIMERO.-** Son parcialmente fundados los
conceptos de agravio expresados por
***** en contra de la sentencia del 27
veintisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, dictada por
el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta
Ciudad.- -----

----- **SEGUNDO.-** Son fundados los motivos de agravio
hechos valer por la apelante ***** en contra
de la resolución recurrida a que se hace mérito.

----- **TERCERO.-** Se modifica la sentencia impugnada a
que alude el punto resolutivo que antecede, para los
efectos precisados en el considerando cuarto de esa
ejecutoria.- -----

----- **CUARTO.-** Quedan compensadas las costas
procesales de segunda instancia.- -----

----- **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE;** y con
testimonio de la resolución, devuélvanse los autos al juez

de primer grado para los efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívese el Toca como asunto concluido.- -----

----- Así lo resolvieron por unanimidad y firman los Ciudadanos Magistrados, ADRIÁN ALBERTO SÁNCHEZ SALAZAR, JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AGUIRRE y HERNAN DE LA GARZA TAMEZ, integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, siendo Presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados, quienes firman hoy 4 cuatro de marzo de 2021 dos mil veintiuno, fecha en que se terminó de engrosar esta sentencia, ante la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- -----

L'JLGA'L'JLCP'clr

Lic. Adrián Alberto Sánchez Salazar
Magistrado

Lic. José Luis Gutiérrez Aguirre
Magistrado

Lic. Hernán de la Garza Tamez
Magistrado

Lic. Lilita Raquel Peña Cárdenas
Secretaria de Acuerdos.

----- Enseguida se publicó en lista del día.----- Conste -----

El Licenciado(a) JOSE LEONARDO CAMPILLO PIZANA, Secretario Proyectista, adscrito a la PRIMERA SALA COLEGIADA CIVIL, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la resolución 35 dictada el JMIÉRCOLES 3 DE MARZO DE 2021) por el MAGISTRADO JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AGUIRRE, constante de 63 fojas útiles. Versión pública a la que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; se suprimieron: el nombre de las partes, el de menores, de testigos y terceros, así como de personas morales; núm y R.F.C.; información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.

Documento en el que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se suprimió la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

Versión pública aprobada en la Tercera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2021 del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, celebrada el 29 de abril de 2021.